



# Asamblea General

Distr. general  
15 de julio de 2019  
Español  
Original: inglés

---

## Septuagésimo cuarto período de sesiones

Tema 72 b) de la lista preliminar\*

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios  
de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y  
las libertades fundamentales**

## **Repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos**

### **Nota del Secretario General**

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe de Idriss Jazairy, Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, presentado de conformidad con la resolución [27/21](#) del Consejo de Derechos Humanos y la resolución [73/167](#) de la Asamblea General.

---

\* [A/74/50](#).



## **Informe del Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos**

### *Resumen*

En el presente informe, el Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos aborda las cuestiones jurídicas derivadas de la práctica de dichas medidas, que se traducen en bloqueos *de facto*, tanto en tiempos de paz como de guerra. Desde esa perspectiva, el Relator Especial examina la situación en varios países y recomienda posibles medidas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos derivadas de esas situaciones.

---

## **Informe del Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos**

### Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción . . . . .	4
II. Sinopsis de las actividades del Relator Especial . . . . .	4
III. Cuestiones jurídicas derivadas de la práctica de bloqueos reales y sanciones económicas equivalentes a un bloqueo <i>de facto</i> . . . . .	5
IV. Sinopsis de determinados casos reales de bloqueos beligerantes y <i>de facto</i> . . . . .	8
A. Bloqueos aplicados en relación con operaciones militares . . . . .	8
B. Sanciones tipo bloqueo aplicadas en tiempos de paz . . . . .	10
V. Conclusiones y recomendaciones . . . . .	16

## I. Introducción

1. El presente informe es el quinto presentado por el Relator Especial a la Asamblea General sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, en cumplimiento de la resolución [27/21](#) del Consejo de Derechos Humanos y la resolución [73/167](#) de la Asamblea General.
2. En el informe, el Relator Especial presenta: una sinopsis de sus actividades desde su informe anterior ([A/73/175](#)) que se centra en el aspecto probablemente más extremo de la práctica de las sanciones unilaterales, es decir, los bloqueos y las sanciones económicas que equivalen a bloqueos *de facto*; un examen de las cuestiones jurídicas derivadas de la práctica de bloqueos reales y sanciones económicas que equivalen a bloqueos *de facto*; un examen de algunos de los casos actuales de bloqueos en conflictos armados más problemáticos y de algunos regímenes de sanciones reales tipo bloqueo aplicados fuera de situaciones de conflicto armado, así como sus conclusiones y recomendaciones.

## II. Sinopsis de las actividades del Relator Especial

3. El 28 de junio de 2018, el Relator Especial hizo una presentación ante el Equipo de Tareas Humanitarias en la República Árabe Siria para informar a los Estados Miembros sobre los problemas en materia de derechos humanos derivados de la aplicación de las sanciones impuestas a ese país.
4. El 17 de julio, el Relator Especial presentó un informe a la Asamblea General ([A/73/175](#)) en el que examinaba las principales novedades en relación con las sanciones unilaterales aplicadas a determinados países y abordaba cuestiones derivadas de la imposición de sanciones unilaterales en tiempos de guerra y paz.
5. El 7 de marzo de 2019, el Relator Especial participó en una mesa redonda celebrada por la organización no gubernamental Organization for Defending Victims of Violence. Los participantes pusieron de relieve las violaciones de los derechos humanos sufridas por los iraníes como resultado de las medidas unilaterales emprendidas por los Estados Unidos de América, en particular, las violaciones de los derechos a la salud y la alimentación y el derecho a la protección contra la pobreza extrema.
6. El 29 de mayo, el Relator Especial dirigió una mesa redonda organizada por la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, en la que se debatió sobre si las sanciones económicas contra la República Árabe Siria podrían estar reteniendo como rehén a la población civil. También se reunió con funcionarios del Gobierno y parlamentarios.
7. El 27 de junio, el Relator Especial participó en calidad de orador principal en un seminario internacional sobre medidas coercitivas unilaterales y sus repercusiones organizado por la Embajada de Cuba en Viena. En su presentación, puso de relieve los problemas en materia de derechos humanos derivados de la imposición de sanciones unilaterales a Cuba, Irán (República Islámica del) y Venezuela (República Bolivariana de).

### III. Cuestiones jurídicas derivadas de la práctica de bloqueos reales y sanciones económicas equivalentes a un bloqueo *de facto*

8. El presente informe tiene por objeto analizar más detenidamente algunos de los casos más extremos de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, es decir, aquellos que puede decirse que equivalen en la práctica a alguna forma de bloqueo del país objeto de sanciones. En su informe anterior al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial describió y denunció la escalada de las sanciones observada en los últimos años. En particular, deploró el ahora recurrente uso de sanciones que, en la práctica, afectan a la capacidad de los países objeto de esas sanciones de interactuar con la comunidad internacional o, en el caso de un banco central que figure en una lista negra, a su capacidad de interactuar con los bancos centrales de otros Estados y el sistema financiero mundial en su conjunto (véase [A/HRC/39/54](#), párrs. 44 a 46).

9. El Relator Especial también expuso que los regímenes de sanciones económicas unilaterales generales que tienen por objeto una aplicación extraterritorial, es decir, que coaccionan a terceros ajenos a la controversia a abstenerse de mantener operaciones económicas o financieras con el Estado objeto de sanciones (denominadas “sanciones secundarias”), y cuyos efectos equivalen prácticamente al bloqueo de un país extranjero, constituyen obviamente una guerra económica ([A/HRC/39/54](#), párrs. 24 a 29)<sup>1</sup>. En relación con ese argumento, cabe señalar que en los últimos meses se ha recurrido cada vez más a la “guerra económica” en sus diferentes formas, a veces, posiblemente, más benigna que la real, y etiquetada como “guerra comercial”, incluso contra socios y aliados comerciales del Estado objeto de sanciones. Quizá uno de los factores que impulsan ese renovado recurso a gran escala a la coerción económica sea la presunción de que las “guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”<sup>2</sup>.

10. Como señaló el Relator Especial en su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos, las medidas coercitivas generales con un alcance extraterritorial se ven casi universalmente rechazadas por ser contrarias al derecho internacional, como puso de manifiesto la resolución [73/8](#) de la Asamblea General, la última de una larga serie de resoluciones sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, aprobadas anualmente desde 1992. La resolución se aprobó el 1 de noviembre de 2018 en votación registrada por 189 votos contra 2. Esta resolución incluye una exhortación a todos los Estados, redactada en términos generales y como norma general, a abstenerse de aplicar medidas coercitivas unilaterales. Las medidas a que se refiere específicamente esta condena son las leyes y disposiciones reglamentarias aprobadas por los Estados, “cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación”. La redacción de la resolución supone la existencia de una obligación real de los Estados, basada en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluida la libertad de comercio y navegación, de abstenerse de aplicar dichas medidas y de poner fin a las ya existentes (resolución [73/8](#) de la Asamblea, párr. 2).

<sup>1</sup> Véanse también Vaughan Lowe y Antonios Tzanakopoulos, “Economic warfare”, en Rüdiger Wolfrum, ed., *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Oxford University Press, 2012), y S. C. Neff, “Boycott and the law of nations: economic warfare and modern international law in historical perspective”, *British Yearbook of International Law*, vol. 59, núm. 1 (1988).

<sup>2</sup> Mensaje de Twitter del Presidente Trump, 2 de marzo de 2018, disponible en <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/969525362580484098>.

11. Es razonable afirmar que los Estados deben considerarse sujetos a la obligación jurídica de no reconocer como lícitas dichas medidas coercitivas unilaterales, máxime las sanciones económicas secundarias y extraterritoriales. Esa obligación, que está relacionada con el principio jurídico general *ex iniuris ius non oritur*, es decir, que un acto ilícito no puede generar derechos<sup>3</sup>, se establece concretamente en el artículo 41 2) de los artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, según el cual:

Ningún Estado reconocerá como lícita una situación creada por una violación grave [por un Estado de una obligación que emane de una norma imperativa de derecho internacional general], ni prestará ayuda o asistencia para mantener esa situación.

12. Es plausible que las violaciones de las normas imperativas de derecho internacional, como a) el derecho a la libre determinación, b) la prohibición de la discriminación racial y c) los principios básicos del derecho internacional humanitario, puedan dar lugar a la obligación de no reconocimiento<sup>4</sup>. En su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial indicó que esos tres conjuntos de normas imperativas podrían incumplirse mediante la imposición de (por lo menos ciertas formas de) sanciones económicas. En ese sentido, el Relator Especial ha propuesto que se haga un llamamiento a la Comisión de Derecho Internacional para que incluya en su programa de trabajo la cuestión de la obligación de no reconocer situaciones ilícitas, con miras a aclarar aún más algunos aspectos de esta norma, en particular su condición de derecho consuetudinario plausible en las situaciones en que la coacción económica infringe el principio de la libre determinación, la prohibición de la discriminación racial o las normas fundamentales del derecho internacional humanitario<sup>5</sup>.

13. El Relator Especial ha pedido asimismo que se exhorte a la Asamblea General a declarar solemnemente a través de una resolución que, como consecuencia de la anterior obligación de no reconocimiento, se espera que los Estados adopten medidas adecuadas (incluido en el ámbito de su legislación nacional) para rechazar cualquier consecuencia, reconocimiento o aplicación, sea cual fuere su forma, de sanciones secundarias extraterritoriales en sus respectivas jurisdicciones. Esto reforzaría la exhortación efectuada una y otra vez en la Asamblea a todos los Estados Miembros a que “no reconozcan ni apliquen esas medidas y a que adopten medidas administrativas o legislativas efectivas, según proceda, para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales” (resolución 34/13 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 3).

<sup>3</sup> Martin Dawidowicz, “The obligation of non-recognition of an unlawful situation”, en James Crawford, Alain Pellet y Simon Olleson, eds., *The Law of International Responsibility*, (Oxford, Reino Unido, Oxford University Press, 2010), pág. 677.

<sup>4</sup> Dawidowicz, “The obligation of non-recognition of an unlawful situation”, pág. 679.

<sup>5</sup> En relación con el contenido de la obligación en general, véase, por ejemplo, Stefan Talmon, “The duty not to ‘recognize as lawful’ a situation created by the illegal use of force or other serious breaches of a jus cogens obligation: an obligation without real substance?”, en Christian Tomuschat y Jean-Marc Thouvenin, eds., *The Fundamental Rules of the International Legal Order* (Leiden, Países Bajos y Boston (Massachusetts), Martinus Nijhoff, 2006). Véase también Djamchid Momtaz, “L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation créée par la violation d’une norme impérative du droit international général”, *Anuario Colombiano de Derecho Internacional*, vol. 10 (2017).

14. La petición anterior del Relator Especial se ve reforzada con la promulgación en 1996 por la Unión Europea del Reglamento (CE) núm. 2271/96 del Consejo, en respuesta a la aprobación por los Estados Unidos de medidas restrictivas sobre Cuba, Irán (República Islámica del) y Libia, cuyo propósito era constreñir a las empresas de la Unión Europea que mantenían en esos países relaciones comerciales o de inversión conformes al derecho europeo. El Reglamento, modificado en 2018 para abarcar las sanciones impuestas a la República Islámica del Irán que los Estados Unidos reintrodujeron, tenía por objeto proteger a las entidades de la Unión Europea contra los efectos de la aplicación extraterritorial de las sanciones “cuando dicha aplicación afecte a los intereses de las personas [...] que se dediquen al comercio internacional o al movimiento de capitales y a actividades comerciales afines entre la Comunidad y terceros países”<sup>6</sup>. Con arreglo al Reglamento, ninguna persona o entidad de la Unión Europea respetará “directamente o través de una filial o intermediario, de forma activa o por omisión deliberada, los requisitos o prohibiciones, incluidos los requerimientos de juzgados extranjeros, basados en [las sanciones contempladas] o derivad[a]s de ell[a]s directa o indirectamente, o en las acciones basadas en ell[a]s o derivadas de ell[a]s”<sup>7</sup>. El Reglamento disponía igualmente que “[l]as resoluciones de juzgados o tribunales y las decisiones de autoridades administrativas ubicadas fuera de la Comunidad que hagan efectiv[a]s, directa o indirectamente, [las sanciones contempladas] o las acciones basadas en ell[a]s o derivadas de ell[a]s, no serán reconocidas ni podrán ser cumplidas de modo alguno”<sup>8</sup>.

15. Desde una perspectiva de derechos humanos, las sanciones económicas cuyos efectos prácticos son muy similares a los de un bloqueo en tiempos de guerra plantean una serie de preocupaciones. Estas sanciones pueden entrañar restricciones al disfrute por parte de la población destinataria de una serie de derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la salud y a la libertad de circulación, y los derechos económicos y sociales en general (A/71/364, párr. 28 y A/HRC/31/44, párr. 4).

16. El Relator Especial es consciente de que los embargos generales combinados con sanciones secundarias no encajan exactamente dentro del concepto de bloqueo “en tiempos de guerra” en el sentido del derecho de los conflictos armados (derecho internacional humanitario). Con arreglo a esa definición técnica, un bloqueo es una operación beligerante que impide que los buques o aeronaves de todas las naciones, enemigas y neutrales, entren o salgan de zonas costeras, puertos o aeropuertos específicos pertenecientes a una nación enemiga, ocupados por ella o bajo su control<sup>9</sup>. Debe también quedar claro que, en el contexto actual, un “bloqueo *de facto*” no supone necesariamente, o no siempre, recurrir a operaciones marítimas de embargo económico (como la interceptación marítima), como hicieron, por ejemplo, los británicos frente a la costa de Mozambique entre 1966 y 1975 en aras del cumplimiento de las sanciones económicas contra Rhodesia autorizadas por el Consejo de Seguridad en su resolución 217 (1965)<sup>10</sup>. Si las sanciones secundarias

<sup>6</sup> Unión Europea, Reglamento (CE) núm. 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella, *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, vol. 39, núm. L 309 (29 de noviembre de 1996), art. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, art. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, art. 4.

<sup>9</sup> Véanse Wolff Heintschel von Heinegg, “Blockade”, en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (actualización de octubre de 2015), y Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3ª ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2016), págs. 257 a 259.

<sup>10</sup> Véase Steven Haines, “War at sea: nineteenth-century laws for twenty-first century wars?”, *International Review of the Red Cross*, vol. 98, núm. 2 (2016), pág. 424, artículo en el que se pone de relieve la distinción jurídica entre bloqueos en tiempos de guerra y operaciones marítimas policiales de embargo económico, tanto por mandato de las Naciones Unidas como unilaterales.

generales con efectos similares a los de un bloqueo no son bloqueos *stricto sensu*, puede argumentarse que las limitaciones a la aplicación de bloqueos impuestas por el derecho de los conflictos armados y que son comúnmente aceptadas y reconocidas como vinculantes para todos los Estados no contemplan dichas sanciones.

17. No obstante, estos tecnicismos jurídicos no deberían eclipsar la similitud general entre los efectos de los bloqueos *de iure* aplicados en tiempos de guerra y los bloqueos *de facto* aplicados en tiempo de paz, ya que las poblaciones civiles de los países objeto de sanciones sufren estos últimos de igual modo que lo harían con aquellos. Esta similitud de efectos exige que los bloqueos *de facto* se rijan por las mismas normas que las enunciadas en el derecho de los conflictos armados (derecho internacional humanitario) en lo que respecta a los bloqueos en tiempos de guerra, a saber, la prohibición del castigo colectivo y los principios de necesidad, proporcionalidad y discriminación<sup>11</sup>.

18. Cabe mencionar también el concepto de “bloqueo pacífico”, un concepto jurídico desarrollado en el siglo XIX como medida de coacción sustitutiva, sin llegar a la guerra, que, en general, ahora se considera obsoleto<sup>12</sup>. “Lo que se conoce generalmente con el nombre de bloqueo pacífico consiste en el cierre de un puerto extranjero o la prohibición al transporte marítimo de acceder a una costa extranjera en tiempos de paz”<sup>13</sup>. Si bien la legalidad de esta medida ha sido ampliamente discutida y es objeto de controversia en la doctrina jurídica<sup>14</sup>, lo que es evidente es que se considera que existe una gran diferencia entre un bloqueo pacífico y uno beligerante (en tiempos de guerra), en el sentido de que un Estado beligerante que impone un bloqueo tiene derecho a prohibir el transporte marítimo entre el Estado sometido al bloqueo y el mundo exterior, mientras que un bloqueo pacífico no debería restringir el transporte marítimo de terceros Estados<sup>15</sup>.

#### IV. Sinopsis de determinados casos reales de bloqueos beligerantes y *de facto*

19. Actualmente, el Estado de Palestina (Gaza) está siendo objeto de un bloqueo naval en el sentido preciso y correcto del término con arreglo al derecho de los conflictos armados, y puede decirse que, en los últimos tiempos, también se ha impuesto uno en el puerto de Al-Hudayda, en el Yemen, al tiempo que se han aplicado medidas similares a un bloqueo (vigentes en el momento de redactar el presente informe) contra Cuba, Irán (República Islámica del), la República Árabe Siria y Venezuela (República Bolivariana de). Si bien el Relator Especial no puede ahondar a este respecto en el presente informe, estos casos se examinan en la sinopsis a continuación.

<sup>11</sup> Véase W. Michael Reisman y Douglas L. Stevick, “The applicability of international law standards to United Nations economic sanctions programmes”, *European Journal of International Law*, vol. 9, núm. 1 (1998).

<sup>12</sup> Véase Herbert Arthur Smith, *The Law and Custom of the Sea*, 3ª ed. (Londres, Stevens, 1959), pág. 144.

<sup>13</sup> Jan Hendrik Willem Verzijl, *International Law in Historical Perspective: Part VIII – Inter-State Disputes and their Settlement* (Leiden, Países Bajos, A.W. Sijthoff, 1976), pág. 43.

<sup>14</sup> *Ibid.*, págs. 43 a 48.

<sup>15</sup> Véase Jeremy Matam Farrall, *United Nations Sanctions and the Rule of Law* (Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press, 2007), pág. 51.



## A. Bloqueos aplicados en relación con operaciones militares

### 1. Estado de Palestina (Gaza)

20. El bloqueo impuesto por las autoridades israelíes a la Franja de Gaza y sus 2 millones de habitantes ha estado en vigor durante más de un decenio. Las protestas masivas en la Franja de Gaza en la primavera de 2019, que dejaron un saldo de al menos 135 palestinos muertos y más de 14.000 heridos (que cuentan con una infraestructura de atención sanitaria al borde del colapso), han renovado la atención internacional sobre la insostenible situación resultante del bloqueo. El Relator Especial observó alarmado el informe publicado en mayo de 2019 por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), en el que se afirmaba que, a consecuencia del bloqueo, más de 1 millón de personas en Gaza —la mitad de la población del territorio—, podría no disponer de alimentos suficientes para el mes siguiente. A esta inseguridad alimentaria se suman otros factores, como los conflictos sucesivos que han arrasado no solo barrios enteros, sino también la infraestructura pública<sup>16</sup>. Decenas de organizaciones humanitarias han llamado conjuntamente la atención sobre el derrumbe de la economía en Gaza, que ha afectado drásticamente al nivel de vida de la población.

21. Las restricciones existentes en la Ribera Occidental, junto con el largo decenio de bloqueo en Gaza, han continuado horadando el sector productivo y han impedido a la economía alcanzar su potencial. Dada la disminución de las transferencias a Gaza a lo largo de 2018, la economía está en caída libre, con una contracción del 6 % en el primer trimestre de 2018 y una tasa de desempleo del 53 % (más del 70 % en el caso de los jóvenes). Teniendo en cuenta que una de cada dos personas en Gaza vivía por debajo del umbral de pobreza antes de esos últimos acontecimientos, ese deterioro tan marcado es alarmante<sup>17</sup>.

22. Los organismos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han recalcado reiteradamente que el bloqueo israelí es ilegal en virtud del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, especialmente debido a que constituye una forma de castigo colectivo, y han llegado a la conclusión de que entrañaba continuas restricciones al disfrute por parte de los habitantes de Gaza de una serie de derechos humanos, en particular, el derecho a la libertad de circulación y sus derechos económicos y sociales (A/71/364, párr. 28 y A/HRC/31/44, párr. 40). El bloqueo es y continúa siendo un motor fundamental de la crisis humanitaria de Gaza (A/HRC/34/36, párr. 36).

23. Los 2 millones de habitantes de Gaza sufren una importante insalubridad del suministro de agua, escasez de electricidad y amplias restricciones a la libertad de circulación. Israel deniega o retrasa con frecuencia la concesión de permisos a quienes solicitan asistencia médica vital fuera de Gaza, al tiempo que los hospitales carecen de recursos suficientes y se enfrentan a una escasez crónica de suministros médicos. Además, Gaza aqueja prolongados cortes en el suministro de electricidad y en el pago de los sueldos de los funcionarios públicos. Se teme que esta situación empeore en vista de la reducción o suspensión prevista de los servicios esenciales de emergencia.

<sup>16</sup> Véase Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), “Más de un millón de personas en Gaza, la mitad de la población del territorio, podría quedarse sin alimentos en junio”, 13 de mayo de 2019.

<sup>17</sup> Banco Mundial, “Economic monitoring report to the Ad Hoc Liaison Committee”, 27 de septiembre de 2018, pág. 5.

del OOPS, dado que dos tercios de la población total de Gaza son refugiados palestinos<sup>18</sup>.

24. Debería exhortarse nuevamente a la comunidad internacional a que reconozca la responsabilidad primordial de Israel por el cierre y bloqueo ilegales de la Franja de Gaza, que es la causa subyacente de su continuo empobrecimiento, y que constituye una forma de castigo colectivo prohibido por el derecho internacional. Concretamente, es hora de que la Unión Europea adopte medidas eficaces para garantizar la aplicación de la Resolución del Parlamento Europeo 2018/2663(RSP), en la que el Parlamento pidió que se pusiera fin de manera inmediata e incondicional al bloqueo y cierre de la Franja de Gaza.

## 2. Yemen

25. El último bloqueo del puerto de Al-Hudayda durante el conflicto en el Yemen ha sido un importante motivo de preocupación. Una novedad positiva es que, en el momento de redactar el presente informe, la finalidad del Acuerdo de Estocolmo, alcanzado el 13 de diciembre de 2018, en particular el Acuerdo sobre la Ciudad de Al-Hudayda y los Puertos de Al-Hudayda, Al-Salif y Ras Isa, es permitir la recuperación gradual de la actividad económica y el aumento de los niveles de importaciones al país. De acuerdo con una exposición informativa del Enviado Especial del Secretario General para el Yemen al Consejo de Seguridad en mayo de 2019, parece que el acuerdo está siendo aplicado sobre el terreno gracias a la determinación de todas las partes en conflicto<sup>19</sup>.

26. Además, en una exposición informativa al Consejo de Seguridad de fecha 17 de junio de 2019, el Enviado Especial puso de relieve los aspectos económicos del Acuerdo sobre Al-Hudayda relativos a los ingresos de los puertos, y expresó la esperanza de que el logro de un consenso sobre esos aspectos facilitaría el pago de los salarios del sector público en la provincia de Al-Hudayda y, posteriormente, en todo el Yemen. Ello supondría un importante avance para el pueblo yemení<sup>20</sup>.

## B. Sanciones tipo bloqueo aplicadas en tiempos de paz

### 1. Venezuela (República Bolivariana de)

27. El anterior informe del Relator Especial al Consejo de Derechos Humanos contiene una descripción completa de las sanciones económicas impuestas a la República Bolivariana de Venezuela por el Gobierno de los Estados Unidos en los últimos años, en particular, desde agosto de 2017, y sus consecuencias en el disfrute de los derechos humanos. En un reciente informe detallado, un fiable laboratorio de ideas de Washington D. C. llegó a la conclusión de que, en general, no ha sido el Gobierno, sino la población civil, la que ha sufrido los efectos de esas sanciones. En ese informe se destaca lo siguiente:

Las sanciones redujeron el consumo de calorías de los ciudadanos, provocaron un aumento de las enfermedades y de la mortalidad (tanto en adultos como en

<sup>18</sup> Según el OOPS, la Franja de Gaza cuenta con una población de aproximadamente 1,9 millones de habitantes, entre ellos, 1,4 millones de refugiados palestinos. Véase [www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip](http://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip).

<sup>19</sup> Véase la exposición informativa al Consejo de Seguridad del Sr. Martin Griffiths, Enviado Especial del Secretario General para el Yemen, de 15 de mayo de 2019, disponible en <https://osesgy.unmissions.org/briefing-martin-griffiths-un-special-envoy-yemen-security-council-1>.

<sup>20</sup> Véase la exposición informativa de la sesión pública del Consejo de Seguridad del Enviado Especial del Secretario General para el Yemen, de 17 de junio de 2019, disponible en <https://osesgy.unmissions.org/briefing-un-special-envoy-secretary-general-yemen-open-session-un-security-council>.

lactantes), así como el desplazamiento de millones de venezolanos que han huido del país como resultado del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Estas sanciones han exacerbado la crisis económica de la República Bolivariana de Venezuela y hacen prácticamente imposible estabilizar la economía, lo que contribuye todavía más al exceso de muertes. Todas estas consecuencias perjudican de forma desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables. Aún más graves y destructivas que las amplias sanciones económicas de agosto de 2017 fueron las sanciones impuestas en virtud del decreto con fecha de 28 de enero de 2019 y posteriores decretos de este año; así como el reconocimiento de un gobierno paralelo, que, como se muestra a continuación, generó una nueva serie de sanciones financieras y comerciales aún más restrictivas que los decretos propiamente dichos<sup>21</sup>.

28. El mismo estudio concluye que las sanciones han causado y es probable que causen cada vez más daños muy graves para la vida y la salud humanas, entre otros, más de 40.000 muertes en el período 2017-2018<sup>22</sup>.

29. Dada la gravedad de las acusaciones formuladas en el informe sobre las muertes en masa provocadas por las sanciones, y basándose en el principio de prueba creíble, el Relator Especial opina que la Asamblea General debe exigir de inmediato una investigación internacional independiente para evaluar la validez y la importancia relativa de dichas afirmaciones.

30. Como indicaron los autores del informe, las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, de 1949, y la Convención de La Haya relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899, de las que el Estado es signatario, e infringen otras normas pertinentes del derecho internacional<sup>23</sup>.

## 2. Cuba

31. El 30 de abril de 2019, el Presidente de los Estados Unidos amenazó con imponer un “bloqueo pleno y completo” y nuevas sanciones a Cuba si sus dirigentes no ponían fin de inmediato a su apoyo militar al actual Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela<sup>24</sup>.

32. Ese fue el último de una serie de pasos dados por los Estados Unidos después de que su líder decidiera revertir las aperturas previas iniciadas bajo la Administración anterior y regresar a una política de aislamiento económico general de Cuba de línea dura (A/72/370, párrs. 7 y 8, y A/73/175, párr. 6). El bloqueo sigue causando grandes daños a la economía cubana y, por consiguiente, a los derechos humanos de los cubanos, como se documenta en los informes anteriores del Relator Especial. Una notable fuente de preocupación fue la decisión de los Estados Unidos de reactivar, en mayo de 2019, las disposiciones del título III de la Ley Helms-Burton de 1996, a fin de ampliar el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a las empresas extranjeras que comercien con Cuba. Desde un punto de vista jurídico, la legislación permite iniciar causas civiles en los tribunales de los Estados Unidos contra empresas extranjeras por

<sup>21</sup> Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, “Economic sanctions as collective punishment: the case of Venezuela”, abril de 2019.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Reuters, “Trump threatens ‘full’ embargo on Cuba over Venezuela security support”, 30 de abril de 2019.

un delito de “tráfico” de las propiedades cubanas expropiadas a los anteriores propietarios estadounidenses<sup>25</sup>.

33. Esa decisión puso fin al *modus vivendi* establecido desde hace mucho tiempo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, basado en un acuerdo bilateral alcanzado en Londres en 1998, en virtud del cual los Estados Unidos habían acordado conceder exenciones respecto de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton y habían contraído el compromiso de abstenerse en el futuro de introducir legislación con efecto extraterritorial de ese tipo<sup>26</sup>, con miras a atenuar la controversia transatlántica que causó la aprobación de dicha Ley<sup>27</sup>. Los dirigentes de la Unión Europea se han “opuesto firmemente a esas medidas debido a su efecto extraterritorial en la Unión Europea, que es violatorio de las normas comúnmente aceptadas del comercio internacional”<sup>28</sup>, pero queda por ver qué medidas efectivas está dispuesta a adoptar la Unión Europea para frenar esas reivindicaciones de jurisdicción extraterritorial.

34. La comunidad internacional llegó a un consenso casi universal en su condena del bloqueo contra Cuba en la resolución 73/8 de la Asamblea General, la resolución más reciente de la Asamblea sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. La resolución estaba orientada a impulsar la adopción de medidas prácticas para aliviar el sufrimiento del pueblo de Cuba y a garantizar el cese de la aplicación de medidas ilícitas que impiden hacer efectivo el derecho al desarrollo del país.

### 3. República Árabe Siria

35. Consideradas en su conjunto, las sanciones económicas generales que varios Estados y organizaciones regionales continúan imponiendo a la República Árabe Siria pueden presumiblemente llevar a una situación que constituya de hecho un grave bloqueo *de facto* del país. Esas sanciones han sido calificadas por los expertos de inhumanas y destructivas<sup>29</sup>, y descritas como los “régimenes de sanciones más complejos y de mayor alcance jamás impuestos”<sup>30</sup>. La complejidad y el número de sanciones financieras y sectoriales específicas han exacerbado el sufrimiento de la población civil siria causado por años de conflicto armado. En los últimos meses, mientras que el Gobierno de la República Árabe Siria ha seguido reafirmando el control sobre grandes partes del territorio del país y ha tratado de impulsar iniciativas para la reconstrucción y la recuperación económica, la imposición de una nueva serie de rigurosas sanciones ha empeorado la difícil situación de la gente común<sup>31</sup>.

36. Este es el caso en particular del endurecimiento de las medidas de prohibición de exportaciones de petróleo a la República Árabe Siria mediante la imposición de sanciones selectivas a entidades extranjeras (incluidas rusas e iraníes) acusadas de

<sup>25</sup> Véase Stephen Wicary, “Trump nears key Cuba sanctions decision over support for Maduro”, Bloomberg, 27 de febrero de 2019.

<sup>26</sup> Véase Brigitte Stern, “Vers la mondialisation juridique ? : les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy”, *Revue générale de droit international public*, vol. 100 (1996).

<sup>27</sup> Stefaan Smis y Kim van der Borgh, “The EU-U.S. compromise on the Helms-Burton and D’Amato acts”, *American Journal of International Law*, vol. 93, núm. 1 (enero de 1999).

<sup>28</sup> Véase Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York, “EU explanation of vote: United Nations General Assembly – ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”, 1 de noviembre de 2018.

<sup>29</sup> Nour Samaha, “The economic war on Syria: why Europe risks losing”, European Council on Foreign Relations, 11 de febrero de 2019.

<sup>30</sup> Justine Walker, “Study on humanitarian impact of Syria-related unilateral restrictive measures”, 16 de mayo de 2016, pág. 6.

<sup>31</sup> Para una exposición detallada de la repercusión de las sanciones económicas en la población civil de la República Árabe Siria en 2019, véanse Donna Abu-Nasr, “Waiting 19 hours for gas in a lifeless city”, Bloomberg, 26 de abril de 2019, y Angus McDowall, “Iran sent oil shipment to Syria, easing fuel crisis”, Reuters, 10 de mayo de 2019.

“facilitar” transacciones relacionadas con las entregas de petróleo al país<sup>32</sup>. Lo mismo sucede con la publicación por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de un documento de orientación dirigido a la comunidad de transporte marítimo de petróleo para alertar a personas de todo el mundo de los importantes riesgos de sanciones de los Estados Unidos a las partes que intervengan en envíos de petróleo a la República Árabe Siria<sup>33</sup>. Esto ha dado lugar, en el punto álgido del invierno, a la crisis de gas más grave en el país en los últimos años<sup>34</sup>. Se informó de lo siguiente:

En las 48 horas siguientes a su publicación, las compañías de seguros cortaron sus lazos con los buques que viajaban a Siria, los barcos cesaron de enviar su carga y el gas prácticamente se agotó. En un esfuerzo para hacer frente a la crisis, el Gobierno sirio pidió a importantes empresarios que compraran buques y transportaran el gas desde la República Islámica del Irán y la Federación de Rusia, sin estar asegurados, lo que es extremadamente peligroso y caro. El costo del transporte se ha disparado debido al riesgo<sup>35</sup>.

37. Estas medidas parecen aún más cuestionables si se tiene en cuenta que sus objetivos declarados incluyen “impedir la normalización de las relaciones económicas y diplomáticas y la financiación de la reconstrucción”<sup>36</sup>, por lo que se plantea la cuestión de si es aceptable negar al pueblo de la República Árabe Siria, después de años de conflictos violentos, el derecho de proceder a la reconstrucción. Las medidas parecen estar en clara contradicción con el derecho al desarrollo.

38. Dichas medidas están afectando gravemente a la economía de la República Árabe Siria y han obligado al Gobierno a promulgar medidas de racionamiento de la gasolina<sup>37</sup>. Los ciudadanos sirios comunes son las víctimas de la situación resultante:

En la actualidad, dentro del país, los ciudadanos sirios comunes hacen cola durante horas para comprar un bote de gas con el que calentarse y cocinar. Los cortes de electricidad asuelan al país. El descontento entre la población es cada vez mayor y claramente público. La situación ha llegado a tales extremos que los funcionarios gubernamentales reconocen esta realidad y advierten a la población que se preparen para “futuras tormentas”. Como señaló un oficial sirio al autor, “la guerra económica es mucho peor que la militar, ya que la económica entra en cada hogar y no hay nadie a quien no le afecte”<sup>38</sup>.

39. Además, también se ha informado de que las sanciones impiden a los sirios acceder a equipo médico y medicamentos básicos, como el equipo hospitalario y los medicamentos básicos contra el cáncer, todo ello debido a los términos establecidos en las sanciones<sup>39</sup>.

<sup>32</sup> Véase Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, “Treasury designates illicit Russia-Iran oil network supporting the Assad regime, Hizballah, and Hamas”, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2018; véase también Alex Wayne, “U.S. sanctions Russian companies to choke off oil for Syria”, Bloomberg, 20 de noviembre de 2018.

<sup>33</sup> Véase Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Sanctions risks related to shipping petroleum to Syria”, documento de orientación dirigido a la comunidad de transporte marítimo de petróleo, 20 de noviembre de 2018.

<sup>34</sup> Samaha, “The economic war on Syria”.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros, “Sanctions risks related to shipping petroleum to Syria”.

<sup>37</sup> Véase Donna Abu-Nasr, “U.S. sanctions on Iran mean Damascus drivers queue for gas”, Bloomberg, 14 de abril de 2019.

<sup>38</sup> Samaha, “The economic war on Syria”.

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### 4. Irán (República Islámica del)

40. La reimposición de sanciones unilaterales generales ya se ha traducido en consecuencias negativas para el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos iraníes. El derecho a la salud parece ser el derecho humano que se ha visto probablemente más amplia y gravemente afectado por las sanciones, como lo demuestran diversas fuentes fidedignas que hacen referencia a numerosos casos de sufrimiento innecesario e incluso muerte, debido a la falta de acceso a medicamentos a causa de las sanciones<sup>40</sup>. Estos efectos adversos ya se habían documentado durante la vigencia de las sanciones antes de la celebración del acuerdo nuclear (Programa de Acción Integral Conjunto) en 2015. En un estudio reciente se señaló que, si bien los Estados Unidos habían eximido nominalmente los bienes humanitarios de las sanciones económicas impuestas, en realidad “las limitaciones al comercio, la renuencia de las instituciones financieras a la hora de procesar transacciones relacionadas con la República Islámica del Irán, así como las políticas equivocadas del Gobierno iraní, han provocado una enorme escasez de medicamentos, con precios exorbitantes”<sup>41</sup>. Se han dado casos en los que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emprendido acciones judiciales contra empresas del sector médico por la venta de pequeñas cantidades de suministros médicos a la República Islámica del Irán, lo que, a su vez, ha tenido un efecto disuasorio en otras empresas que comercian con el país.<sup>42</sup> El mismo estudio concluye también lo siguiente:

Las sanciones pueden limitar en mayor medida el acceso a los medicamentos y a una atención sanitaria adecuada al resultar menos accesibles desde el punto de vista económico. El estudio de Dursun Peksen sobre la repercusión de las sanciones económicas en la salud pública<sup>43</sup> señala que las sanciones agravan la situación al causar daños a la economía del país objeto de sanciones. En el caso de la República Islámica del Irán, los informes indican que, en el período 2012-2013, el precio de los medicamentos aumentó entre un 50 % y un 75 %. En combinación con la recesión económica y el aumento del desempleo, la accesibilidad de los pacientes iraníes a los medicamentos se vio reducida<sup>44</sup>.

Según una investigación sobre el terreno llevada a cabo en la República Islámica del Irán en 2013, los pacientes de asma, cáncer y esclerosis múltiple debieron hacer frente a la escasez de medicinas o al aumento vertiginoso de los precios. Esta investigación llegó además a la conclusión de que muchos pacientes de cáncer habían abandonado el tratamiento debido al aumento de los precios de los medicamentos. Cabe asimismo señalar que, aunque la República Islámica del Irán produce cerca del 90 % de sus propios medicamentos, a consecuencia de las sanciones, las empresas farmacéuticas han tropezado con numerosas dificultades a la hora de adquirir los principios activos necesarios para la fabricación de medicamentos de producción local<sup>45</sup>.

41. Desde una perspectiva macroeconómica, un informe publicado por el Banco Mundial en octubre de 2018, justo antes de que se volvieran a introducir las sanciones,

<sup>40</sup> Véase, por ejemplo, Tamara Qiblawi, Frederik Pletigen y Claudia Otti, “Iranians are paying for US sanctions with their health”, CNN, 22 de febrero de 2019.

<sup>41</sup> Sina Azodi, “How US Sanctions hinder Iranians’ access to medicine”, Consejo del Atlántico, 31 de mayo de 2019.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Dursun Peksen, “Economic sanctions and human security: the public health effect of economic sanctions”, *Foreign Policy Analysis*, vol. 7, núm. 3 (julio de 2011).

<sup>44</sup> Fatemeh Kokabisaghi, “Assessment of the effects of economic sanctions on Iranians’ right to health by using human rights impact assessment tool: a systematic review”, *International Journal of Health Policy Management*, vol. 7, núm. 5 (2018).

<sup>45</sup> Azodi, “How US Sanctions hinder Iranians’ access to medicine”.



pronosticó los efectos económicos adversos de las sanciones económicas unilaterales que se indican a continuación:

A mediano plazo, la economía experimentará una trayectoria descendente, ya que se espera que las exportaciones de petróleo se reduzcan a la mitad con respecto a los niveles registrados en 2017/18 tras la reintroducción gradual de las sanciones de los Estados Unidos, que finalizará en noviembre de 2018. [...] Está previsto que la economía se contraiga en promedio un 1,4 % entre 2017/18 y 2020/21, y que se registre una disminución de las exportaciones y el consumo en cuanto a la demanda, y una contracción del sector industrial respecto de la oferta. También se prevé un deterioro de los saldos del Gobierno, dado que los ingresos procedentes del petróleo representan más del 40 % de los ingresos del gobierno central. Ante el desajuste de las exportaciones, se espera un aumento de la demanda de dólares de los Estados Unidos para financiar las importaciones y el ahorro, y es probable que la prima de los tipos de cambio paralelos aumente aún más que la brecha actual del 150 % entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Se prevé que el aumento de los precios de las importaciones causado por la devaluación incremente la inflación por encima del 30 % en los próximos años, conforme aumentan las expectativas de inflación y se desploma la confianza de los consumidores, lo que conducirá una vez más a un período de estanflación para la República Islámica del Irán. A pesar de la amortización y la caída de las importaciones, se estima que la reducción de las exportaciones de petróleo eliminará el superávit en cuenta corriente, que es inferior al del anterior episodio de sanciones de las Naciones Unidas, ya que el precio del petróleo se ha reducido a casi la mitad con respecto a los niveles registrados en el período 2012-2013. Es probable también que la trayectoria descendente de la economía ejerza aún más presión sobre el mercado de trabajo y revierta los recientes logros en materia de creación de empleo. La caída de valor real de las transferencias en efectivo causada por la inflación puede contrarrestar los efectos positivos en el bienestar derivados del crecimiento económico registrado en 2016 y 2017 y agravar las consecuencias del crecimiento negativo previsto para después de 2017<sup>46</sup>.

42. En aquel momento, el Banco Mundial expresó la opinión de que existía cierto grado de incertidumbre con respecto al impacto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos en las relaciones económicas externas de la República Islámica del Irán, dependiendo de cómo se adaptara el resto de los socios comerciales<sup>47</sup>. Ahora los datos apuntan al creciente aislamiento económico del país, y, en particular, a un aparente colapso del comercio entre la Unión Europea y la República Islámica del Irán en los últimos meses<sup>48</sup>. La mayoría de las empresas transnacionales se han visto obligadas a abandonar el país y algunas incluso han cumplido en exceso las medidas impuestas por los Estados Unidos. Las empresas no están dispuestas a arriesgarse a perder el acceso a los mercados de los Estados Unidos o hacer frente a enormes sanciones financieras o penales en los Estados Unidos, en caso de proseguir con sus actividades comerciales con la República Islámica del Irán. Esta situación pone de manifiesto que, hasta la fecha, los mecanismos diseñados por la Unión Europea para proteger a sus empresas de los efectos de las sanciones unilaterales secundarias han demostrado ser en gran medida ineficaces, incluido el “Reglamento de bloqueo” actualizado de la Unión Europea. Además, los pagos y los flujos financieros se ven afectados por las prohibiciones *de facto* en cuanto al uso de sistemas internacionales

<sup>46</sup> Banco Mundial, “Iran's economic outlook”, 3 de octubre de 2018.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Las estadísticas muestran que el comercio entre la República Islámica del Irán y los Estados miembros de la Unión Europea durante el primer mes de 2019 se situaba en los 343,38 millones de euros, lo que supone una caída del 82,72 % con respecto al mismo período del año 2018. Véase “Iran trade with EU plunges”, *Financial Tribune*, 13 de abril de 2019.

de pago por transferencia electrónica (exclusión del sistema SWIFT), con lo que incluso las exenciones humanitarias resultan ineficaces<sup>49</sup>. Se trata, una vez más, de una situación de tipo bloqueo que exige la aplicación de la norma que prohíbe el castigo colectivo y prescribe el libre acceso a los mercados de suministros humanitarios, bienes esenciales y productos alimenticios básicos.

43. A su vez, el bloqueo de la República Islámica del Irán también ha afectado a terceros países, incluido el Afganistán, teniendo en cuenta que los 2,5 a 3 millones de ciudadanos afganos que presuntamente vivían en calidad de trabajadores extranjeros en la República Islámica del Irán en 2017 han sufrido profundamente la crisis económica provocada por las sanciones. Muchos de ellos ya se han visto obligados a abandonar el país como consecuencia de los recortes en los sueldos o de la pérdida de empleo<sup>50</sup>.

44. En el momento de la redacción, las sanciones más recientes aplicadas por los Estados Unidos, esto es, el decreto publicado el 24 de junio de 2019, por el que se sanciona a la Oficina del Líder Supremo de la República Islámica del Irán y se autoriza la imposición de nuevas sanciones a quienes estén vinculados a ella, constituyen una nueva escalada que solo puede avivar las tensiones y poner en peligro las perspectivas de una solución pacífica de la controversia entre los dos países. El mismo resultado podría derivarse de la anunciada “lista negra” del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica del Irán y de las reiteradas amenazas de uso de la fuerza armada, así como la amenaza de “obliteración” del país<sup>51</sup>.

## V. Conclusiones y recomendaciones

45. El Relator Especial recalca que la aplicación generalizada de medidas coercitivas unilaterales, en particular las de carácter general y tipo bloqueo, refuerza la apremiante necesidad de crear una oficina de adquisiciones de las Naciones Unidas encargada de hacer frente a los efectos nocivos del exceso de celo de bancos e intermediarios financieros en su cumplimiento, que impide el acceso de la población necesitada incluso a los bienes exentos, como los alimentos y los medicamentos. A raíz de la sugerencia del Relator Especial, este modelo se aplicó con éxito en el Sudán, por lo que el Relator Especial considera que resultaría eficaz para atender, en particular, las necesidades del pueblo de Irán (República Islámica del), la República Árabe Siria y Venezuela (República Bolivariana de).

46. Otra sugerencia que el Relator Especial ya ha formulado es la de encargar a un representante especial del Secretario General la tarea de abordar las causas fundamentales que llevaron a imponer sanciones y facilitar un diálogo sobre políticas entre los países impulsores de las sanciones y los destinatarios de estas, y, al mismo tiempo, trabajar para minimizar las repercusiones en materia de derechos humanos de dichas sanciones.

47. La tercera recomendación es que la comunidad internacional se una para aprobar una declaración internacional sobre las medidas coercitivas unilaterales y el estado de derecho. El Relator Especial propuso por primera vez esta idea en 2017, y sigue colaborando con los Estados para crear un consenso en torno a la

<sup>49</sup> Véase, por ejemplo, Babak Dehghanpisheh, “Flood-hit Iran getting no financial aid from abroad due to U.S. sanctions: statement”, Reuters, 7 de abril de 2019.

<sup>50</sup> Véase Babak Dehghanpisheh y Hamid Shalizi, “Afghanistan feels impact of Iran's economic isolation”, Reuters, 25 de abril de 2019.

<sup>51</sup> Véase Zamira Rahim, “Trump says war with Iran would cause ‘obliteration like you’ve never seen before’”, *Independent*, 22 de junio de 2019.



idea de acordar normas mínimas de comportamiento cuando se recurra a medidas coercitivas unilaterales, hasta el momento en que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para eliminarlas en su totalidad.

48. Se ha empleado la expresión “nunca más” para movilizar a la comunidad internacional en torno a la idea de que una guerra total, una guerra mundial, no tiene cabida en una sociedad civilizada. El Relator Especial considera que ha llegado el momento de decir lo mismo sobre la aplicación de sanciones unilaterales, al menos las impuestas con el fin de lograr objetivos políticos y un cambio de régimen. Las sanciones unilaterales ya no son una alternativa a la guerra; empiezan a ser su preámbulo, o pueden ser una forma disimulada de guerra: también matan.

---